



Bogotá, D.C., 30 NOV 2017
DP 00461

Doctor:

JUAN GUILLERMO ZULUAGA

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Avenida Jiménez N° 7A – 17 (Tel. +571-2543300)

Ciudad

Respetado Doctor Zuluaga,

La Procuraduría General de la Nación ha recibido alertas de varias organizaciones y líderes del Chocó acerca de un inminente cierre de la Dirección Territorial de Restitución de Tierras o de modificar su equipo de trabajo según un esquema que operaría sin Director territorial.

En virtud de esa información, la Procuraduría General debe puntualizar que las dos fórmulas podrían generar efectos regresivos en la garantía de los derechos a la restitución de tierras y de derechos territoriales de pueblos étnicos de las áreas atendidas por esa oficina. Precizando que la Unidad de Restitución de Tierras en ejercicio de sus competencias debe orientarse al cumplimiento de los principios rectores de la función pública; además de propender porque la cobertura de las Oficinas Territoriales que apenas están empezando su labor o que tienen aún ejecutorias pendientes (bien por el ritmo de la microfocalización de las áreas que le corresponden o porque tengan rezagos de atención a solicitudes, o porque la complejidad de los casos le han demandado tiempos mayores), esté en mejora continua.

De acuerdo con las cifras de la propia URT, a mayo de 2017 se habían presentado 2131 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente – RTDAF en el Departamento de Chocó. El 91% de dichas solicitudes no ha surtido el trámite administrativo porque los predios se ubican en zonas no microfocalizadas.

En relación con la restitución de derechos territoriales y/o protección de territorios colectivos de pueblos étnicos, al 30 de mayo de 2017 se habían presentado 10 solicitudes de Restitución y protección de territorios, de las cuales 4 están en etapa de caracterización y las otras 6 ya están inscritas en el RTDAF. Una de esas solicitudes ya ha sido resuelta en sentencia judicial.

Lo anterior permite a la Procuraduría General de la Nación señalar que en las áreas atendidas por la Oficina Territorial del Chocó de la Unidad de Restitución de Tierras, aún está pendiente la gran mayoría del trabajo institucional diseñado en la Ley 1448 y en los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011.

De otra parte, la Procuraduría considera que de conformidad con el Artículo 1° de la Resolución 762 de 2017 el propósito principal del cargo de Director Territorial de la Unidad Administrativa Especial para la Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD es *“Ejecutar e implementar las estrategias diseñadas desde el nivel central, de intervención, participación y actuación de la*



Unidad en los procesos administrativos de registro y judiciales de restitución". Y que, entre las funciones esenciales de los Directores Territoriales resultan de especial significado las relacionadas con el proceso administrativo de ingreso al Registro de Tierras Despojadas, las relativas a las estrategias frente a casos de restitución de importancia especial, las que tienen que ver con el desarrollo de los procesos de restitución de territorios de grupos étnicos, y con el seguimiento del cumplimiento de las medidas de restitución establecidas en los Planes Integrales de Reparaciones para estos grupos; o las referentes al seguimiento de ordenes en los fallos judiciales.

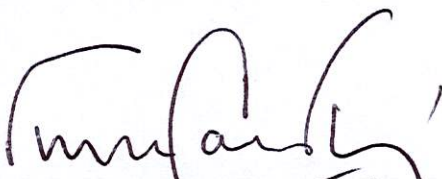
En general, la normativa da a entender que el cargo de Director de oficina territorial se creó bajo el supuesto que éste es necesario para que la URT garantice el ejercicio eficaz, coordinado y eficiente de sus competencias, en clave de gestión y de salvaguarda de derechos.

De conformidad con las normas expuestas el Ministerio Público tiene que anotar que la necesidad de una Oficina Territorial con su Director debe ser valorada según diversos criterios, entre ellos: (i) el estado actual de la satisfacción de los derechos de las víctimas a acceder a mecanismos eficaces para tramitar sus solicitudes de restitución, (ii) las estadísticas de atención, trámite y resolución de las solicitudes individuales y colectivas, y (iii) el progreso de la microfocalización, entre otros elementos, que permitan tomar decisiones ponderadas, según la lógica de la justicia transicional y la necesidad de construir una paz basada en derechos que ampare decididamente los derechos de las víctimas.

El Ministerio Público, alerta sobre la posibilidad de que la decisión de cerrar la Oficina Territorial del Chocó o de debilitar su equipo, pueda generar rezagos mayores y dinámicas contrarias a los principios de no regresividad y progresividad en materia de defensa de los derechos humanos y que encuentran expresión concreta en el sistema jurídico de restitución de tierras. En desmedro de la población víctima de despojo o abandono forzado de sus tierras, en especial de los pueblos y comunidades étnicas que han activado la ruta de restitución de derechos territoriales o que tienen derecho a hacerlo próximamente, pues sus solicitudes deben ser valoradas rigurosamente según los parámetros de atención integral que tiene el proceso de restitución, en consonancia con las dinámicas sociales y culturales de cada población.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación recomienda que cualquier decisión administrativa sobre la oficina regional de Chocó, se adopte según criterios admisibles constitucionalmente, de manera que el proceso de decisión se surta con especial cuidado de no privilegiar razones operativas a costa de generar efectos adversos sobre los derechos de las víctimas.

Cordialmente,


FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación

Copia al Director de la U.A.E.G.R. de Tierras Despojadas,
RICARDO SABOGAL URREGO, Avenida Calle 26 N° 85B-09, Bogotá.